

Coproducción de imaginarios sobre justicia hídrica y desarrollo verde en Ecuador

Emilie Dupuits

Universidad Internacional del Ecuador

Abstract: Coproducing imaginaries on water justice and green development in Ecuador

Facing water injustices and extractivist policies, grassroots movements of the province of Imbabura, in the northern highlands of Ecuador, are seeking to participate in and benefit from green infrastructure projects. Both the Pesillo-Imbabura regional drinking water project and the HidroIntag mini hydraulic plants project illustrate this trend. However, grassroots movements often have to negotiate their initial claims in order to get involved in these projects. To what extent the coproduction of sociotechnical imaginaries linked to green infrastructure projects transform water justice grassroots movements' claims and strategies? What are the counterimaginaries that emerge at the margins of these modernizing processes? This paper analyses, from a political ecology and feminist technoscience perspectives, how the participation of water grassroots movements in green infrastructure projects means the coproduction of sociotechnical imaginaries with public authorities, private companies or development agencies, the transformation of their initial territorial claims and the emergence of counterimaginaries by resisting actors. *Keywords:* Sociotechnical imaginaries, green development, grassroots movements, water, Ecuador.

Resumen

En un contexto de injusticia hídrica y de extractivismo, varios movimientos comunitarios de la provincia de Imbabura, en la sierra norte del Ecuador, buscan participar en y beneficiarse de proyectos de desarrollo verde. Tanto el proyecto regional de agua potable Pesillo-Imbabura como el proyecto de minicentrales hidroeléctricas HidroIntag ilustran esa tendencia. Sin embargo, los movimientos comunitarios se ven obligados a negociar sus demandas iniciales para estar incluidos en esos proyectos. ¿En qué medida la coproducción de imaginarios sociotécnicos asociados a proyectos de desarrollo verde transforma las demandas y estrategias de los movimientos comunitarios por la justicia hídrica? ¿Cuáles son los contraimaginarios producidos en la periferia de esos procesos modernizadores? Este artículo analiza, desde una perspectiva de ecología política, cómo la participación de los movimientos comunitarios por el agua en proyectos de desarrollo verde implica la coproducción de imaginarios sociotécnicos con las autoridades públicas, la empresa privada y las agencias de desarrollo, la transformación de sus demandas territoriales iniciales y la emergencia de contraimaginarios por actores resistentes. *Palabras clave:* imaginarios sociotécnicos, desarrollo verde, movimientos comunitarios, agua, Ecuador.

Introducción

La provincia de Imbabura, ubicada en la sierra norte del Ecuador, es el escenario de varios movimientos sociales que luchan por la justicia hídrica en un contexto de amenazas crecientes por distintos tipos de extractivismos, que incluyen la minería, el agronegocio y la producción hidroeléctrica a gran escala (Warner et al. 2017; Sacher 2017). Esas amenazas del extractivismo para la conservación y el manejo del agua se repiten en la mayoría de los países de la región latinoamericana, provocando la multiplicación de movimientos de defensa por la justicia hídrica. Los movimientos indígenas y las juntas de agua de la región han venido luchando desde hace más de veinte años para tener acceso al agua potable y reducir la brecha con el sector urbano y la industria florícola (Hidalgo et al. 2017). Los movimientos campesinos y ambientalistas del valle de Intag, situado al oeste de la provincia, también siguen luchando contra la actividad minera para conservar sus recursos hídricos y desarrollar alternativas productivas sostenibles al extractivismo (Bebbington y Humphreys-Bebbington 2011; Davidov 2014).

En respuesta a las demandas de esos movimientos sociales han surgido varios proyectos de desarrollo verde que buscan involucrar a las comunidades y contribuir al desarrollo local. Dos proyectos de infraestructura relacionados con el agua, emblemáticos por su carácter histórico y su escala regional, ilustran esa tendencia. Por un lado, el proyecto regional de agua potable Pesillo-Imbabura busca proveer de agua potable a 156 comunidades en alianza con cinco municipios de la provincia. Por otro lado, el proyecto de minicentrales hidroeléctricas HidroIntag une a las comunidades locales, las autoridades públicas y la empresa privada con el fin de financiar un fondo territorial de conservación hídrica y desarrollo sostenible para los habitantes. Ambos proyectos ilustran una nueva generación de proyectos hídricos que articulan actores públicos, privados y comunitarios en beneficio de necesidades locales de acceso al agua potable o de desarrollo de actividades productivas sostenibles.

Esos proyectos, caracterizados como “inclusivos”, “verdes” o “innovadores”, vinculan ciertos imaginarios sociotécnicos, entendidos como la creencia en el poder de la tecnología y la ciencia para resolver problemas ambientales y promover el desarrollo (Jasanoff y Kim 2015). Se relacionan con políticas públicas más amplias que buscan profesionalizar, formalizar y modernizar el sector comunitario, pero también con un enfoque técnico y empresarial promovido por los actores públicos, privados y de cooperación internacional. Sin embargo, los imaginarios sociotécnicos están también difundidos por los propios movimientos comunitarios que usan diversas estrategias o adaptan ciertos conceptos a sus realidades. Entonces, no se trata solo de entender las resistencias comunitarias en contra de megaproyectos o de procesos de modernización, sino de estudiar sus dinámicas de apropiación, hibridación y coproducción (Goodwin 2019; Dupuits et al. 2020).

¿En qué medida la coproducción de imaginarios sociotécnicos asociados a proyectos de desarrollo verde transforma las demandas y estrategias de los movimientos comunitarios por la justicia hídrica? ¿Cuáles son los contraimaginarios producidos en la periferia de esos procesos modernizadores? Este artículo analiza, desde una perspectiva de ecología política y de tecnociencia feminista, cómo la participación de los movimientos comunitarios por el agua en proyectos de desarrollo verde implica la coproducción de imaginarios sociotécnicos. También muestra cómo esa coproducción implica una negociación de las demandas iniciales para la justicia hídrica o en contra de extractivismo, y el surgimiento de contraimaginarios por actores resistentes.

En este artículo se analizan en detalle dos casos de estudio en relación con proyectos de desarrollo verde involucrando a las comunidades de la provincia de Imbabura: el proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura y el proyecto de minicentrales hidroeléctricas HidroIntag. Si bien ambos proyectos nacen en un contexto de conflictividad alrededor del agua por usos competidores del recurso, demuestran dos procesos distintos de modernización y la producción de diferentes imaginarios sociotécnicos alrededor del agua. El análisis se basa en un trabajo de campo realizado en la provincia de Imbabura, Ecuador, como parte del proyecto postdoctoral de la autora. La primera fase exploratoria se desarrolló entre julio y diciembre de 2018 y una segunda fase de profundización se realizó entre agosto y septiembre de 2019. Se realizaron veinte entrevistas semiestructuradas con actores claves de los dos proyectos: líderes comunitarios, representantes de los municipios, actores de la cooperación internacional y del sector privado. También se llevaron a cabo varias observaciones directas de eventos¹ relacionados a los dos proyectos y al tema del agua a nivel local, regional y nacional, y se realizaron visitas de campo a los dos proyectos en Intag y en la zona de Pesillo.

Primero presentamos un marco contextual y una revisión de literatura sobre las resistencias al extractivismo y el surgimiento de proyectos de desarrollo verde en el Ecuador y, más específicamente, en la provincia de Imbabura. Segundo, desarrollamos un marco teórico y metodológico acerca de la coproducción y adaptación de los imaginarios sociotécnicos desde un enfoque de ecología política. Luego, analizamos dos proyectos de modernización verde y las estrategias movilizadas por los movimientos comunitarios por el agua. Finalmente, proponemos una discusión sobre los beneficios y riesgos de la inclusión de los movimientos comunitarios por el agua en proyectos de desarrollo verde y las negociaciones que implican a nivel local.

Contexto histórico de injusticia hídrica y extractivismos en Imbabura

Uno de los principales componentes del “socialismo del siglo XXI”, iniciado por el gobierno postsocialista de Rafael Correa en 2007 y continuado por el gobierno de Lenin Moreno, se ha basado en la construcción de megaobras hidráulicas (Warner et al. 2017). Además, varios autores analizan la situación de

injusticia hídrica provocada por el incremento de políticas de agronegocio en Ecuador afectando a las comunidades campesinas e indígenas (Mena-Vasconez et al. 2016; Partridge 2017; Hidalgo et al. 2017). Esos autores estudian la reproducción de relaciones coloniales en los procesos de acaparamiento del agua y la tierra, así como la producción de una inseguridad hídrica para los pueblos indígenas. Hidalgo et al. (2017) analizan, por ejemplo, cómo el sistema de riego Tabacundo, ubicado en la provincia de Imbabura (Figura 1), está en el centro de disputas entre las industrias florícolas, que consumen gran cantidad de agua desde su auge en los años ochenta y noventa, y las comunidades campesinas e indígenas de la zona. Otra característica central del gobierno de la “Revolución Ciudadana” es el incremento de las inversiones mineras en el país y la exacerbación de conflictos socioambientales (Bebbington et al. 2008). Esas políticas extractivistas entran en contradicción con el Buen Vivir y los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de 2008.



Figura1: Mapa de la provincia de Imbabura, Ecuador (Google Maps)

El valle de Intag es un caso emblemático de las luchas sociales contra la minería y para la conservación de los recursos hídricos. Hubo varios intentos fracasados de empresas extranjeras que pretendían iniciar la explotación minera del cobre en la región. Davidov (2014) menciona los intentos en los años noventa por la empresa japonesa Bishi Metals, luego por la canadiense Copper Mesa y por la chilena CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile), que se enfrentaron a una gran resistencia comunitaria (Bebbington et al. 2008). Varias organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y Acción Ecológica, así como el municipio de Cotacachi, jugaron un papel central en la oposición a la minería declarando Cotacachi como “cantón ecológico” en 2000 (Garbay 2008).

Hacia una modernización “verde”, “inclusiva” e “innovadora”

En este contexto de conflictividad entorno al agua han surgido varios proyectos de infraestructura que buscan incluir a las comunidades en alianza con las autoridades gubernamentales y el sector privado, y promover el desarrollo local y regional. Esos proyectos revelan así la voluntad del gobierno ecuatoriano de profesionalizar, formalizar y modernizar las prácticas y saberes comunitarios entorno al agua, a través del gobierno por ‘comunidades convenientes’ (Boelens et al. 2015). Más allá de las disputas, varios actores comunitarios han entrado recientemente en relaciones de colaboración con los gobiernos locales con el fin de desarrollar proyectos de acceso al agua potable. Según la Ley de recursos hídricos del 2014,² los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) tienen la corresponsabilidad con las juntas de agua potable y saneamiento (JAAPS) de proveer el servicio de agua potable a los pobladores tanto de la zona urbana como rural. Varios autores analizan la conformación de redes comunitarias, federaciones indígenas y alianzas público-comunitarias en el país como formas de democratización del manejo del agua y de escalamiento de sus demandas (Dupuits y Bernal 2015; Hoogesteger 2012; Riofrancos 2017). Goodwin (2019) también subraya la existencia de relaciones de colaboración histórica desde los años 1960 entre juntas de agua en la provincia de Imbabura.

El proyecto regional de agua potable Pesillo-Imbabura nace de una lucha histórica en los años noventa por los pueblos indígenas de la provincia para acceder al agua potable en un contexto de alta escasez del recurso hídrico por la presión causada por múltiples usos productivos, agropecuarios e industriales. El proyecto involucra a 156 comunidades con pequeños sistemas de agua, a su vez organizados en catorce juntas regionales, en alianza con los cinco cantones de Ibarra, Antonio Ante, Otavalo, Pedro Moncayo y Cayambe. Consiste en un trasvase de agua desde el oriente hacia el occidente, a través de una red de canales alrededor del volcán Imbabura que usa la infraestructura del canal de riego Cayambe-Tabacundo ya construido. Se beneficiará a cerca de 300.000 personas, con una dotación de 200 litros por habitante y día.

Desde el punto de vista de las relaciones de colaboración, varios autores se enfocan también en la emergencia de alternativas a la actividad minera en Intag como otras formas de desarrollo (Lang et al. 2013). La inversión de DECOIN en la conformación de reservas hídricas comunitarias y en el desarrollo de actividades agroecológicas contribuyó en gran medida a unificar la población en contra de la minería (Avci y Fernández-Salvador 2016). Además, el Consorcio Toisan fue creado en 2005 con el motivo de impulsar las propuestas de desarrollo territorial de los habitantes de Intag frente a la minería (Murillo y Sacher 2017). A pesar de las resistencias, el gobierno ecuatoriano formó en 2012 una alianza entre la empresa nacional minera (ENAMI) y CODELCO con el fin de reactivar el proyecto ahora denominado Llurimagua en Junín. Una de las alternativas desarrolladas en Intag es el proyecto HidroIntag, que tiene como objetivo la construcción de dos minicentrales hidroeléctricas en las parroquias de

Nangulvi y Apuela que generaría una energía de 6.2 millones de MW, con un coste de 12 millones de dólares. La energía vendría comprada por la empresa de Cemento Selva Alegre Otavalo (UNACEM) y los beneficios estarían manejados a través de un fondo territorial a beneficio de 68.000 hogares.

La multiplicación de alianzas público-comunitarias y de alternativas territoriales al extractivismo revela la existencia de relaciones de colaboración entre los actores más allá de la resistencia. Sin embargo, el involucramiento de las comunidades en proyectos de desarrollo verde también implica una negociación de sus demandas iniciales y una transformación de las estrategias del movimiento social. Se busca analizar, a continuación, cómo los actores comunitarios coproducen y adaptan los imaginarios sociotécnicos sobre el agua.

Los imaginarios sociotécnicos desde la ecología política

Varios campos teóricos han profundizado la noción de imaginarios sociotécnicos en relación con los recursos naturales. Desde la ecología política, ciertos autores han analizado los imaginarios sociotécnicos en el caso del uso estratégico de los recursos naturales para la construcción del territorio del Estado-nación. Barandiarán (2019) estudia, por ejemplo, los imaginarios de desarrollo alrededor del litio en Bolivia y el rol de la ciencia y la tecnología en proyectos colectivos de construcción de la nación. Swyngedouw (1999), además, habla de *waterscapes* y de “misión hidráulica” en su análisis del desarrollo de mega-infraestructuras hidráulicas en la España del siglo XX y su rol en la ideología fascista.

A partir del campo de los estudios de la ciencia y la tecnología (STS), Jasanoff y Kim (2015, p. 6) definen los imaginarios sociotécnicos como “visiones colectivas, institucionalmente estabilizadas y públicamente desempañadas de futuros deseables, animadas por entendimientos compartidos de formas de vida social y de orden social alcanzables a través de, y apoyadas en, progresos en la ciencia y la tecnología”. Sin embargo, explican que los imaginarios sociotécnicos no se limitan a los Estados-nación sino que pueden estar producidos por otros tipos de actores como las corporaciones, los movimientos sociales y los profesionales. Además, precisan que el concepto de imaginario va más allá del discurso, siendo los imaginarios “construcciones colectivas de como los individuos entienden su lugar en un mundo cultural e histórico específico”.

Los imaginarios sociotécnicos están estrechamente relacionados con los procesos de modernización (Mignolo 2017). Varios autores hablan de modernidades plurales y de la posibilidad de procesos de hibridación (Escobar 2010; Radcliffe 2012) y de coproducción del conocimiento (Goodwin 2019). Esas modernidades plurales revelan la posibilidad para los movimientos de base de actuar desde dentro de las estructuras estatales y de poder (Laurie et al. 2005; Radcliffe 2012). Sin embargo, Goodwin (2019) subraya la necesidad de estudiar las raíces históricas de los procesos de coproducción, que muchas veces se vinculan con estructuras capitalistas e implican una pérdida de autonomía para

las organizaciones de la sociedad civil. Kerschner et al. (2018) proponen una tipología de imaginarios tecnológicos divididos entre la innovación para el desarrollo, el desarrollo verde o eco-modernismo, y el decrecimiento que tiene relación con la noción de justicia hídrica. A través de esas metanarrativas se ilustran los procesos de modernización y de hibridación. Detallamos a continuación las dos categorías del desarrollo verde y de la justicia hídrica por su interés en este análisis.

El concepto de desarrollo verde, o crecimiento verde, surge sobre todo de los actores de la cooperación internacional que buscan adecuar los objetivos de conservación ecológica y de desarrollo económico e institucional con la participación de los actores marginados y la reducción de la pobreza (Brand y Lang 2019). El desarrollo verde también se acerca a la noción de ecomodernismo, que traduce la creencia en el poder de la tecnología para resolver la crisis ambiental (Vanhulst y Beling 2014). Además, más que un concepto neutro y fijo, se trata de una construcción social traducida en los discursos de los distintos actores según sus intereses y poblaciones beneficiarias. Por ejemplo, Mills-Nova et al. (2020) estudian, en el caso de Ecuador, cómo las agencias de desarrollo crean ciertas categorías de beneficiarios para implementar sus programas de adaptación al cambio climático, vinculado a la construcción de imaginarios expertos y racionales.

La justicia hídrica busca resaltar la distribución desigual de los beneficios, el acceso y el control sobre el agua, así como las tensiones en torno a los derechos de agua, el conocimiento y las prácticas culturales (Boelens et al. 2018). La justicia hídrica articula cuatro dimensiones centrales: redistribución socioeconómica, reconocimiento cultural, participación política y equilibrio intergeneracional (Zwarteveen y Boelens 2014). Se hace eco de las nociones más amplias de justicia ambiental y climática, que destacan la existencia de desigualdades socioambientales en la distribución de los beneficios y problemas ambientales (Martínez-Alier 2020). A través del estudio de los imaginarios sociotécnicos, buscamos entender cómo tanto los movimientos comunitarios como las autoridades públicas, la empresa privada y los actores internacionales negocian y transforman sus concepciones del desarrollo y la tecnología a través de procesos de coproducción. También buscamos entender los riesgos y limitaciones de esos procesos de coproducción de imaginarios sociotécnicos en relación con las demandas históricas de los movimientos comunitarios para la justicia hídrica y las alternativas al extractivismo.

Pesillo-Imbabura: De proyecto político emblemático a crecimiento verde

El proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura es el resultado de una lucha social histórica llevada por los pueblos indígenas para revertir la situación de injusticia hídrica que afecta al sector rural. El expresidente de la Junta administradora de agua potable Pesillo-Imbabura comenta que:

Han sido 22 años de lucha. Inicialmente estábamos 3.400 habitantes en querer tener acceso a agua potable. La intención era unirnos entre 56 comunidades y se conformó una organización de juntas administradoras de agua potable de Imbabura. Se buscaban fuentes de agua pero todo era adjudicado. Por eso nos fuimos hacia Sucumbíos en el Oriente a través de un túnel de trasvase para transportar el agua.³

También menciona el contexto de alta tensión en las marchas, paros y movilizaciones del movimiento indígena en esa época. El inicio de las obras de infraestructura fue permitido por la voluntad política, tanto por parte del gobierno nacional como de los cinco municipios involucrados. El expresidente de la Junta administradora de agua potable Pesillo-Imbabura explica el rol clave del gobierno de Rafael Correa a partir de 2012 en romper con la instrumentalización política del proyecto para dar paso a su avance:

Se dejó de lado la política para trabajar por el agua al cien por cien. Es Correa quien hace realidad este proyecto porque los ocho gobiernos anteriores no le daban prioridad. Correa dijo que es trabajo del Estado obrar para concretar el derecho humano agua como mandato constitucional.⁴

Aparte del gobierno nacional, el proyecto es la suma de los esfuerzos políticos de los cinco municipios involucrados, que aportan el 35 por ciento de los fondos. El otro 65 por ciento es un fondo no reembolsable a través de un préstamo por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco del Estado. Después de su reactivación política a partir de 2012, el proyecto entra en una fase técnica con el inicio de las obras en septiembre de 2017. La AFD, como contraparte principal del proyecto, proyecta una visión basada en el imaginario de crecimiento verde e inclusivo. La representante de la AFD en Ecuador expresa su visión del agua como un “servicio mercantil que se debe proveer a través de un justo precio, la calidad del servicio y el compromiso de los municipios sin dejar de lado a la población”.⁵ Sin embargo, se reconoce la necesidad de adaptar los proyectos de modernización tecnológica a la realidad Andina. El director de la empresa de gestión pública Pesillo-Imbabura explica que

la modernización se piensa como la tecnología de punta, pero la tecnología tiene que ser al mínimo costo por nuestra capacidad económica. Todos tenemos derecho al Sumak Kawsay independientemente del bolsillo, el segmento más desprotegido, con tarifa justa.⁶

El proyecto Pesillo-Imbabura también se adecua con los mandatos contenidos en el marco regulatorio de la Ley de agua. El presidente de la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarios de Gestión del Agua del Ecuador (ROSCGAE) menciona el carácter innovador del proyecto por su forma de alianza público-comunitario y su escala regional.⁷ Se enmarca en el objetivo de la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) de profesionalizar al sector comunitario, impulsar la asociatividad de las juntas de agua del país y conformar

alianzas con los municipios quienes son los encargados legales de los servicios de agua potable. El directorio de la empresa pública mancomunada Pesillo-Imbabura está conformado de forma rotativa por tres representantes de los municipios y dos representantes de las juntas de agua. Todavía está por definirse a través de una consultoría un modelo de gestión que sea equitativo entre lo público y lo comunitario. Una de las metas es formalizar a las catorce juntas regionales y capacitarlas para que tengan el mismo nivel de organización administrativa.

Otro reto clave es la unificación de las tarifas del servicio de agua manejadas por los sistemas comunitarios que varían mucho entre sí. Sin embargo, el proyecto se enfrenta a varias dificultades políticas que cuestionan su aparente buena gestión técnica. Primero, varios actores expresan su desconfianza por su percepción de una captación del poder por la junta de agua Pesillo-Imbabura. En enero de 2019, se eligió una nueva directiva por falta de rendición de cuentas e informe económico por parte del anterior presidente. El nuevo presidente electo temporalmente, explica que los líderes de las juntas regionales denunciaron “el manejo político en beneficios de unos.”⁸ Segundo, permanece una resistencia por parte de ciertas comunidades en conformar alianzas público-comunitarias por la percepción de acaparamiento por los municipios de un proyecto resultado de una lucha social de años.⁹ El ex subsecretario de agua potable y saneamiento en SENAGUA comenta sobre esa situación:

Unos municipios piensan que autonomía es eliminar a las juntas. Pero la competencia en agua es de todo el cantón, no solo en la ciudad, hay que entrar en un proceso de dialogo. Esa situación persiste en muchos municipios con la percepción de que las juntas son ineficientes, incompetentes, que hay que absorberlas.

Además, el contexto político de las últimas elecciones municipales en abril 2019 afectó la continuidad del proyecto. El nuevo presidente de la JAAP Pesillo-Imbabura explica que han visitado a las nuevas autoridades para volver a explicar la importancia del proyecto Pesillo-Imbabura y tejer relaciones de colaboración. También comenta sobre la brecha que sigue existiendo entre las ciudades y las comunidades rurales de la provincia, lo que dificulta concretar los objetivos de justicia social del proyecto.

La encargada de proyecto en la AFD observa los límites en la socialización del proyecto hacia las comunidades y los temores de una falta de sostenibilidad social y política más allá de su avance técnico.¹⁰ Existe una cierta responsabilidad de la AFD por el carácter apolítico de la agencia que tiende a generar un desequilibrio entre el avance técnico y la capacidad real de las comunidades en gestionar el servicio de agua a futuro. Para revertir esas limitaciones, la Junta de agua Pesillo-Imbabura ha realizado 198 socializaciones a nivel comunitario. Como segunda fase están previstas unas capacitaciones en el uso adecuado del agua para que no se desperdicie. Además, el presidente de la JAAP Pesillo-Imbabura explica que “le han pedido a la AFD justicia social. Tienen que em-

plear a gente de la comunidad en la obras y volver a redactar el modelo de gestión desde la comunidad.”¹¹

Un ejemplo de la resistencia que enfrentó el proyecto fue la demanda de un proyecto paralelo al Pesillo-Imbabura por la comunidad de Pesillo-Olmedo. Este proyecto responde a la marginalización inicial de la comunidad del proyecto por razones técnicas. Con este proyecto paralelo, la comunidad buscó conservar su autonomía al no adherirse a una junta regional y mantener un proyecto de escala local. El subsecretario de la demarcación hidrográfica de Mira, expresa sus dudas al respecto:

La comunidad emblemática de Pesillo no debería quedar afuera, debe adherirse a una regional. No es técnicamente viable tener un sistema a nivel de una sola comunidad, debe ser una administración conjunta. No es adecuado volver a un modelo de gestión del pasado.¹²

Sin embargo, con la elección de la nueva directiva, la comunidad de Pesillo-Olmedo se está reintegrando a la junta regional Pesillo.

Otro tipo de tensiones se da por los distintos usos del agua en la zona. Respecto a la conservación de las fuentes de agua (en este caso, el lago San Pablo como captación del agua para el proyecto Pesillo-Imbabura), el proyecto no contempla ningún mecanismo directo para su financiación. Eso se debe al enfoque netamente basado en la construcción de infraestructura hídrica para la provisión de agua potable promovido por la AFD. Sin embargo, podría ser un tema clave en la definición de una tarifa equitativa del agua entre el sector rural y urbano, y en la generación de oportunidades económicas para el sector del turismo. Otras organizaciones están, en cambio, desarrollando alternativas territoriales a través de mecanismos financieros que apoyen la conservación de los páramos por las comunidades indígenas. Por ejemplo, la Confederación del pueblo Kayambi, miembro de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), ha creado la “Reciprocidad del agua” con el fin de involucrar a los centros urbanos y las florícolas en el pago por el cuidado de los páramos. Esa propuesta de contraimaginario busca revertir la situación de injusticia hídrica entre los distintos actores.

Finalmente, el proyecto Pesillo-Imbabura ha evolucionado desde su creación como resultado de una lucha política histórica de los pueblos indígenas hacia su apropiación por los municipios y cooperantes internacionales bajo un imaginario de crecimiento verde e inclusivo. Detrás de los avances técnicos del proyecto se esconden relaciones de poder y tensiones políticas, no solo entre los municipios y las comunidades locales, sino también entre las propias comunidades y los líderes comunitarios a la cabeza del proyecto. En este caso, la coproducción de imaginarios sociotécnicos tiende a exacerbar injusticias hídricas y sociales entre lo rural y lo urbano, y a nivel comunitario. Sin embargo, la paralización del proyecto está en proceso de desbloqueo por las demandas de justicia social y las acciones de socialización realizadas por la nueva directiva de las juntas de agua de la zona.

HidroIntag: El escalamiento de una alternativa eco-territorial

El proyecto HidroIntag fue formulado a partir de 2007 por actores de la sociedad civil de la Corporación Toisan, conformada por nueve organizaciones de base que promueven alternativas productivas, sociales y ambientales a la actividad extractivista en la zona. El principal representante del proyecto desde la sociedad civil explica que HidroIntag es una iniciativa de

economía popular y comercio justo. Es la esperanza de un desarrollo territorial desde la gente. Se piensa como una tecnología desde abajo para hacer frente a la amenaza del extractivismo y la explotación minera a gran escala. Se propone un desarrollo con identidad al producir energía limpia con el agua.¹³

Varios actores internacionales jugaron un papel clave en el escalamiento de la propuesta inicial. El director de planificación en el municipio de Cotacachi menciona el apoyo del gobierno de Cuba, a través de técnicos de Cuba Solar, para hacer la evaluación del potencial hídrico de la cuenca y dar las primeras capacitaciones en 2007.¹⁴ Entre 2008 y 2014 no hubo apoyo de la administración del municipio mientras el proyecto se siguió impulsando por la Corporación Toisan. El alcalde de la parroquia de Apuela menciona la importancia de la buena voluntad política que permitió revivir el proyecto a partir de 2014 con la elección de una nueva administración en el municipio de Cotacachi.¹⁵

La alianza de las comunidades con el municipio de Cotacachi también responde a un nuevo marco regulatorio inscrito en la Constitución de 2008, aprobada bajo el gobierno socialista de Rafael Correa, que obliga a tener una mayoría de participación del sector público en los proyectos vinculados a recursos estratégicos como el agua. Por este motivo se creó en marzo de 2018 la Empresa de Economía Mixta HidroIntag CEM conformada por la Empresa Pública de Energía Renovable y Turismo Cotacachi E.P. y UNACEM Ecuador S.A. Esa colaboración responde a la normativa legal que da la prioridad a la conformación de alianzas público-privadas. El principal representante del proyecto desde la sociedad civil explica que responde también a la necesidad de demostrar una sostenibilidad empresarial más allá del proyecto comunitario inicial.

El directorio de la empresa estuvo inicialmente conformado por dos representantes del municipio de Cotacachi, dos representantes de la empresa privada y un representante de las comunidades. El gerente de la unidad de ecología industrial de la UNACEM y miembro del directorio explica el papel central de la comunidad en el proyecto:

El motivo es el desarrollo de la comunidad, está totalmente involucrada, tiene que vigilar y supervisar los caudales, porque si no hay agua no hay proyecto. El involucramiento de la comunidad es el fuerte del proyecto porque genera recursos económicos para la propia comunidad. A más de licencia ambiental, hay una licencia social.¹⁶

El acercamiento a la UNACEM se hizo por su política de responsabilidad social y ambiental, así como su imagen positiva en la zona, que se vincula con un involucramiento de la empresa en el desarrollo de energías limpias y proyectos comunitarios, así como en la generación de empleos para las comunidades. Además, la UNACEM, como productora de cemento, está clasificada como minería no-metálica y entonces se percibe de manera independiente a las empresas de minería metálica de alto impacto ambiental.

La alianza entre los distintos actores de la empresa mixta HidroIntag es el resultado de una negociación y refleja intereses compartidos. Las comunidades defendieron su derecho a una participación plena en el directorio para no caer en una participación ficticia o simbólica. Más allá de su representación en el directorio, las comunidades participan a través de su organización en quince consejos de cuenca conformados por juntas de agua, parroquias y organizaciones sociales. Esta representación se consolidaría con la formalización de las juntas de agua en una junta regional. También han conformado un fondo territorial en forma de fideicomiso para manejar los proyectos de desarrollo comunitario y de conservación del agua que se financiarán con los beneficios de la producción hidroeléctrica.

Uno de los principales proyectos que se quiere desarrollar con el fondo territorial es la conformación del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Intag-Toisán (ACUSMIT). Este proyecto se enmarca en la política de compra de reservas hídricas comunitarias por DECOIN implementada a partir del 1997. Silvia Quilumbango, miembro de DECOIN e iniciadora de la iniciativa, menciona que hasta el día de hoy existen cuarenta reservas hídricas comunitarias en Intag representando cerca de 7.562 ha en manos de comunidades o parroquias.¹⁷ Más allá de la conservación del recurso hídrico, el fondo territorial serviría para apoyar las alternativas productivas de las organizaciones de base de la zona. Es el caso, por ejemplo, de la Red de Ecoturismo de Intag (REI) o de la Asociación de Caficultores Rio Intag (AACRI), ambas miembro de DECOIN. Durante una visita a la comunidad de Junín, un líder comunitario comentó la división que existe entre los grupos mineros y antimineros y también la oportunidad de volver a convencer a los comuneros de retomar los proyectos productivos como la producción de café orgánico en el contexto del cierre del proyecto de exploración minera Llurimagua dentro de cuatro años.

Sin embargo, el proyecto HidroIntag y las iniciativas de financiación de proyectos de conservación o de alternativas productivas en la región se enfrentan a resistencias por parte de grupos promineros (minería metálica) y agricultores. El alcalde de Apuela menciona la necesidad de

reducir la ampliación de la frontera agrícola, es un problema serio. En la Reserva Cotacachi-Cayapas, la zona de amortiguamiento es demasiado corta, los finqueros están sobre la reserva, hay ataques de osos de anteojos a las vacas, así que ya no ven a la conservación como una alternativa. La inten-

ción es integral, hay un componente social en el proyecto de construcción de minicentral hidroeléctrica en Apuela.

La resistencia por parte de algunos productores se debe a la confusión sobre las prácticas productivas que se podrán seguir haciendo o no al declarar una nueva área de conservación. Más allá de las resistencias locales, el proyecto HidroIntag se encuentra paralizado por la falta de voluntad política de Auki Tituaña, el nuevo alcalde de Cotacachi electo en abril de 2019.¹⁸ El representante de la sociedad civil de la Corporación Toisan comenta la visión politizada y la voluntad del nuevo alcalde de romper con el proyecto HidroIntag por tensiones con la antigua administración del municipio de Cotacachi, que apoyaba el proyecto.¹⁹

Esta ruptura política afecta al proyecto HidroIntag, ya que el presidente de la empresa mixta es el alcalde de Cotacachi. Además, el alcalde emitió una nueva ordenanza municipal que reduce el poder de decisión de la sociedad civil en la empresa mixta. Esa dependencia demuestra un cierto abandono de autonomía por parte de las comunidades hacia los actores públicos y privados. El director de planificación en el municipio de Cotacachi expresa el

temor de que se está entregando al municipio todo el poder y dónde queda la representación del sector comunitario. Más adelante si hay alguien sin voluntad de colaborar con la comunidad, va a haber un conflicto porque el municipio es dueño al 51 por ciento.

Además, el proyecto HidroIntag estuvo paralizado por una inseguridad jurídica a nivel nacional ya que el gobierno tardó en aprobar el reglamento a la Ley de electricidad por motivos políticos.²⁰ Por tanto, la UNACEM no quería firmar los estudios definitivos en un contexto de incertidumbre respecto al marco legal.

Existe también una controversia acerca de la alianza establecida con la UNACEM más allá de su responsabilidad social y ambiental. Si bien la UNACEM se considera parte del sector de la minería no-metálica, sigue teniendo cierto impacto ambiental. La decisión de vender la energía hidroeléctrica a la UNACEM y no a los usuarios locales se deriva de la ley que exige la venta de energía producida por pequeñas centrales a entes privados. Esa legislación se debe a la búsqueda por el Estado de recursos económicos por parte del sector privado. Además, la historia de la UNACEM está vinculada a la empresa de cemento Lafarge que tuvo la concesión hasta el año 2014. Según Acción Ecológica, la empresa Lafarge sigue estando acusada de daño ambiental en la comunidad de Perugachi por contaminación del aire.²¹

Frente a esa paralización, el proyecto está en fase de adaptación y reescalamiento para contornar los bloqueos a nivel municipal. La primera opción contemplada era la venta del 50 por ciento de las acciones de la empresa mixta al presidente de la región. Sin embargo, el presidente reelecto rechazó esa propuesta por temores políticos acerca del municipio. Otra opción es la venta de

las acciones del municipio a la mancomunidad que esta por legalizarse entre varios gobiernos parroquiales de Intag, o el desarrollo de un proyecto de menor alcance. Si esa opción pudiera atraer fondos de cooperación internacional, también conllevaría dificultades en términos de capitalización de la empresa. Una última opción es la venta de las acciones a la UNACEM, transformando el proyecto en una iniciativa completamente privada.

Finalmente, el proyecto HidroIntag evolucionó desde su enfoque territorial y comunitario en el momento de su creación hacia su apropiación por la empresa privada y el municipio de Cotacachi a través de un imaginario de responsabilidad social y ambiental. El proceso de coproducción del proyecto implicó una dependencia creciente hacia los requisitos de sostenibilidad económica y financiera por parte de la UNACEM. Además, el proyecto HidroIntag se encuentra paralizado por intereses políticos a nivel regional que van en contra de los imaginarios ecoterritoriales y antiextractivista inicialmente promovidos. Como respuesta, los defensores del proyecto buscan reescalar el proyecto hacia una iniciativa privada-comunitaria o un retorno a las bases territoriales.

Discusión y conclusión

El análisis de los dos casos de estudio de Pesillo-Imbabura e HidroIntag, en los Andes del norte de Ecuador, ha permitido responder a nuestras cuestiones iniciales: ¿En qué medida la coproducción de imaginarios sociotécnicos asociados a proyectos de desarrollo verde transforma las demandas y estrategias de los movimientos comunitarios por la justicia hídrica? ¿Cuáles son los contraimaginarios producidos en la periferia de esos procesos modernizadores? Hemos analizado cómo la participación de los movimientos comunitarios por el agua en proyectos de desarrollo verde implica la coproducción de imaginarios sociotécnicos con las autoridades públicas, la empresa privada o las agencias de desarrollo. También hemos mostrado cómo la inclusión de actores comunitarios en los procesos de modernización implica una negociación de sus demandas iniciales para la justicia hídrica o en contra del extractivismo, y el surgimiento de contraimaginarios por actores resistentes.

Primero, el análisis revela la evolución desde un contexto de alta conflictividad social hacia la entrada en relaciones de colaboración y de alianza público-comunitaria. En esos proyectos de modernización, los actores comunitarios aceptan negociar su autonomía y el ideal inicial del movimiento social para obtener beneficios de acceso al agua o recursos para la conservación y el desarrollo local. Varios actores comunitarios se conforman entonces con los marcos regulatorios del Estado, la formalización de sus juntas, o los estándares de eficiencia en el manejo del agua impuestos desde afuera, lo que hace eco a la idea de “gobierno a través de comunidades convenientes” (Boelens et al. 2015). Además, ambos proyectos revelan un proceso similar de evolución desde una posición política a sus inicios hacia un enfoque técnico caracterizado por la valorización de la tecnología y de su poder para mejorar el desarrollo local de

las comunidades. La imposición de imaginarios de crecimiento verde o de eco-modernismo es visible en los discursos y acciones de la AFD y de la UNACEM. Por lo tanto, el análisis de esos dos casos nos invita a identificar los marcos históricos detrás de los procesos de coproducción, que muchas veces tienden a beneficiar a los actores más poderosos y a reproducir injusticias sociales e hídricas preexistentes (Goodwin 2019).

Esa evolución hacia lo técnico afecta los modos de participación e inclusión efectiva de las comunidades en los procesos de decisión y gobernanza de los proyectos. En ambos casos, la participación comunitaria se ve reducida por los requisitos de actores más poderosos o aspectos político-legales. Además, esa evolución técnica parece constituir una traba para la sostenibilidad de los proyectos por las resistencias políticas que puede generar. La apariencia de buena gestión técnica esconde el alto grado de dependencia al contexto político nacional y regional que afecta en ambos casos a la continuidad de los proyectos y su futura viabilidad. Tanto el proyecto Pesillo-Imbabura como el HidroIntag se encuentran paralizados por motivos políticos a nivel comunitario en el primer caso, y a nivel municipal, en el segundo.

Ambos casos también demuestran el carácter evolutivo de las estrategias de los distintos grupos de actores. En el caso de HidroIntag, se está dando un proceso de reescalamiento hacia el nivel local, a fin de contornar las tensiones con el municipio. La idea inicial de desarrollar una alternativa ecoterritorial con la producción comunitaria de hidroelectricidad se transforma progresivamente en una iniciativa privada o una alianza privada-comunitaria. En el caso del Pesillo-Imbabura, está en marcha un proceso de autocrítica hacia los propios representantes comunitarios que acapararon durante varios años el poder, limitando su socialización a nivel local. El proceso de fortalecimiento de lo comunitario busca generar un verdadero contrapoder a la imposición de la idea de crecimiento verde por parte de los municipios y de los cooperantes.

Por otro lado, no solo los actores comunitarios se adaptan a los procesos de modernización, sino que los actores de la cooperación internacional también transforman sus imaginarios al colaborar con movimientos de la sociedad civil. Tanto la AFD como la UNACEM se confrontan con la necesidad de considerar las demandas de justicia social defendidas por los actores comunitarios, revelando un proceso mutuo de negociación y adaptación. Se trata entonces de procesos de adaptación e hibridación a la modernidad (Radcliff 2012; Mignolo 2017). Esas dinámicas también muestran cómo los actores comunitarios están involucrados en la coproducción y la difusión de imaginarios sociotécnicos, como planteron Jasanoff y Kim (2015). Por lo tanto, no solo los gobiernos o los cooperantes internacionales contribuyen a producir imaginarios de modernización a nivel nacional, sino que los actores comunitarios también participan de esos procesos a nivel regional y local.

Finalmente, la coproducción de imaginarios sociotécnicos va de la mano de la emergencia de contraimaginarios que buscan repolitizar los proyectos de desarrollo comunitario. Esas alternativas territoriales cuestionan la capacidad

real de los proyectos de desarrollo verde de revertir la historia de injusticia hídrica y las presiones generadas por el extractivismo. La propuesta de crear una reciprocidad del agua en el territorio del pueblo Kayambi revela otros imaginarios sobre el manejo comunitario del agua, vinculados a una identidad intercultural y ancestral. En el caso de HidroIntag, se ha logrado mantener un mayor grado de autonomía comunitaria con la constitución de un fondo territorial en beneficio de las comunidades de la zona. Sin embargo, continúa un conflicto entre los tenantes de la conservación hídrica y los tenantes de las actividades productivas, incluyendo la minería, lo que demuestra la complejidad de la producción de imaginarios de desarrollo verde y de justicia hídrica a nivel local.

* * *

Emilie Dupuits es investigadora postdoctoral, con una beca de la Swiss National Science Foundation (SNSF). Es investigadora invitada en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Central del Ecuador. Fue investigadora invitada en CEDLA, Universidad de Ámsterdam. Obtuvo su doctorado en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Ginebra.

Dirección: Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). Av. Jorge Fernández s/n y Av. Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

Correo electrónico: dupuits.emilie@gmail.com

Agradecimientos: La autora quiere agradecer a la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) por haber financiado la realización de este artículo a través de su programa de residencias de investigación. También agradece al Fondo Nacional Suizo (FNS) por haber financiado la realización del trabajo de campo vinculado a esa investigación, a través del proyecto de postdoctorado con referencia P2GEP1-174966. Finalmente, la autora quiere agradecer a Geoff Goodwin por proveer comentarios muy relevantes sobre la versión preliminar de este artículo.

Notas

- 1 Asamblea del Agua, Cayambe, 30/08/2018. Visita oficial de la AFD a la planta del proyecto Pesillo-Imbabura, Cayambe, 12/09/2018; Foro Agua y Comunidad, Pucara, 14/09/2018. Marcha Nacional por la defensa del agua y la vida, Quito, Ecuador, 14/11/2018. V Encuentro Nacional de Gestión Comunitaria del Agua, Quito, Ecuador, 15/11/2018. Yaku Raymi, San Pablo, Ecuador, 30/11/2018. Visita a la comunidad de Junin, Intag, Ecuador, 02-03/12/2018.
- 2 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, 2014.
- 3 Entrevista en Ibarra, Ecuador, 03/08/2018.
- 4 Entrevista en Ibarra, Ecuador, 03/08/2018.

- 5 Observación directa en Cayambe, Ecuador, 12/09/2018.
- 6 Entrevista en Ibarra, Ecuador, 03/08/2018.
- 7 Entrevista en Quito, Ecuador, 01/08/2018.
- 8 Entrevista en Ibarra, Ecuador, 16/08/2019.
- 9 Participación en la Marcha Nacional por la defensa del agua y la vida, Quito, Ecuador, 14/11/2018.
- 10 Entrevista en Quito, Ecuador, 30/10/2018.
- 11 Entrevista en Ibarra, Ecuador, 16/08/2019.
- 12 Entrevista en Ibarra, Ecuador, 18/10/2018.
- 13 Entrevista en Pucara, Ecuador, 14/09/2018.
- 14 Entrevista en Cotacachi, Ecuador, 22/10/2018.
- 15 Entrevista en Apuela, Ecuador, 05/08/2018.
- 16 Entrevista en Quito, Ecuador, 19/10/2018.
- 17 Observación directa del Foro Agua y Comunidad, Pucara, Ecuador, 14/09/2018.
- 18 Auki Tituaña, uno de los primeros alcaldes indígenas de Ecuador, fue alcalde de Cotacachi entre 1996 y 2009. Durante este periodo, apoyo las políticas ambientales y antimineras de las organizaciones de Intag.
- 19 Entrevista por Skype, 28/08/2019.
- 20 Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 20/08/2019.
- 21 La cementera que dividió a la comunidad indígena de Perugachi. <https://es.mongabay.com/2016/12/la-cementera-dividio-la-comunidad-indigena-perugachi/>

Referencias

- Avcı, D. & Fernández-Salvador, C. (2016). Territorial dynamics and local resistance: Two mining conflicts in Ecuador compared. *The Extractive Industries and Society*, 3(4), 912–921. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.007>
- Barandiarán, J. (2019). Lithium and development imaginaries in Chile, Argentina and Bolivia. *World Development*, 113, 381–391. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.019>
- Bebbington, A. & Humphreys Bebbington, D. (2011). An Andean avatar: Post-neoliberal and neoliberal strategies for securing the unobtainable. *New Political Economy* 16 (1): 131–45. <https://doi.org/10.1080/13563461003789803>.
- Bebbington, A., Humphreys Bebbington, D., Bury, J., Langan, J., Muñoz, J. P. & Scurrah, M. (2008). Mining and social movements: Struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes. *World Development*, 36(12), 2888–2905. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.11.016>
- Boelens, R., Hoogesteger, J. & Baud, M. (2015). Water reform governmentality in Ecuador: Neoliberalism, centralization, and the restraining of polycentric authority and community rule-making. *Geoforum*, 64, 281–291. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.07.005>
- Boelens R., Perreault T. & Vos J. (2018). *Water justice*, Cambridge University Press.
- Brand, U. & Lang, M. (2019). Green economy. In Kothari Ashish, S. A., Escobar, A., Demaria, F. & Acosta, A., *Pluriverse. A post-development dictionary*. Tulika Books.
- Davidov, V. (2014). Land, copper, flora: Dominant materialities and the making of ecuadorian resource environments. *Anthropological Quarterly*, 87(1), 31–58. <https://doi.org/10.1353/anq.2014.0010>

- Dupuits, É. & Bernal, A. (2015). Scaling-up water community organizations: The role of inter-communities networks in multi-level water governance. *Flux*, 99(1), 19. <https://doi.org/10.3917/flux.099.0019>
- Dupuits, É., Baud, M., Boelens, R., De Castro F. & Hogenboom, B. (2020) Scaling up but losing out? Water commons' dilemmas between transnational movements and grassroots struggles in Latin America, *Ecological Economics*, Vol. 172, 106625. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106625>
- Escobar, A. (2010). Latin America at a crossroads: Alternative modernizations, post-liberalism, or post-development? *Cultural Studies*, 24(1), 1–65. <https://doi.org/10.1080/09502380903424208>
- Garbay, S. (2008). Participación y activismo: La población de Intag frente a la explotación minera. Universidad Andina Simon Bolivar. <http://www.uasb.edu.ec/contenido?participacion-y-activismo-la-poblacion-de-intag-frente-a-la-explotacion-minera>
- Goodwin, G. (2019). The problem and promise of coproduction: Politics, history, and autonomy. *World Development*, 122, 501–513. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.06.007>
- Hidalgo, J. P., Boelens, R. & Vos, J. (2017). De-colonizing water. Dispossession, water insecurity, and Indigenous claims for resources, authority, and territory. *Water History*, 9(1), 67–85. <https://doi.org/10.1007/s12685-016-0186-6>
- Hoogesteger, J. (2012). Democratizing water governance from the grassroots: The development of Interjuntas-Chimborazo in the Ecuadorian Andes. *Human Organization*, 71(1), 76–86. <https://doi.org/10.17730/humo.71.1.b8v77j0321u28863>
- Jasanoff, S., & Kim, S. H. (2015). Dreamscapes of modernity: Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226276663.001.0001>
- Kerschner, C., Wächter, P., Nierling, L. & Ehlers, M. H. (2018). Degrowth and technology: towards feasible, viable, appropriate and convivial imaginaries. *Journal of Cleaner Production*, 197, 1619–1636. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.147>
- Lang, M., Lopez, C., Santillana Ortiz, A., & Rosa-Luxemburg-Stiftung (eds.). (2013). *Alternativas al capitalismo*. Quito: Abya Yala.
- Laurie, N., Andolina, R. & Radcliffe, S. (2005). Ethnodevelopment: Social movements, creating experts and professionalising Indigenous knowledge in Ecuador. *Antipode*, 37(3), 470–496. <https://doi.org/10.1111/j.0066-4812.2005.00507.x>
- Martínez-Alier J. (2020). A global environmental justice movement: mapping ecological distribution conflicts. *Disjuntiva*, 1(2), 81–126.
- Mena-Vásquez, P., Boelens, R. & Vos, J. (2016). Food or flowers? Contested transformations of community food security and water use priorities under new legal and market regimes in Ecuador's highlands. *Journal of Rural Studies*, 44, 227–238. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.02.011>
- Mignolo, W. (2017). *Local histories/global designs: Coloniality, subaltern knowledges, and border thinking*. <http://dx.doi.org/10.23943/princeton/9780691156095.001.0001>
- Mills-Novoa, M., Boelens, R., Hoogesteger, J. & Vos J. (2020). Governmentalities, hydrosocial territories & recognition politics: The making of objects and subjects for climate change adaptation in Ecuador. *Geoforum* 115, 90–101. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.06.024>
- Murillo Martín, D. C. & Sacher, W. (2017). Nuevas territorialidades frente a la megaminería: El caso de la Reserva Comunitaria de Junín. *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*, (22), 46. <https://doi.org/10.17141/letrasverdes.22.2017.2727>
- Partridge, T. (2017). Resisting ruination: Resource sovereignties and socioecological struggles in Cotopaxi, Ecuador. *Journal of Political Ecology*, 24(1), 763–776.

- Radcliffe, S. A. (2012). Development for a postneoliberal era? Sumak kawsay, living well and the limits to decolonisation in Ecuador. *Geoforum*, 43(2), 240–249. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.09.003>
- Riofrancos, T. N. (2017). Scaling Democracy: Participation and Resource Extraction in Latin America. *Perspectives on Politics*, 15(03), 678–696. <https://doi.org/10.1017/S1537592717000901>
- Sacher, W. (2017). *Ofensiva megaminera china en los Andes: Acumulación por desposesión en el Ecuador de la 'Revolución Ciudadana'*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Swyngedouw, E. (1999). Modernity and hybridity: Nature, *regeneracionismo*, and the production of the spanish waterscape, 1890-1930. *Annals of the Association of American Geographers*, 89(3), 443–465. <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00157>
- Vanhulst, J. & Beling, A. E. (2014). Buen vivir: Emergent discourse within or beyond sustainable development? *Ecological Economics*, 101, 54–63. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2014.02.017>
- Walter, M., Latorre, S., Munda, G. & Larrea, C. (2016). A social multi-criteria evaluation approach to assess extractive and non-extractive scenarios in Ecuador: Intag case study. *Land Use Policy* 57 (November): 444–458. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.05.030>
- Warner, J., Hoogesteger, J. & Hidalgo, J. P. (2017). Old wine in new bottles: The adaptive capacity of the hydraulic mission in Ecuador. *Water Alternatives*, 10(2), 322–340.
- Zwarteveen, M. & Boelens R. (2014). Defining, researching and struggling for water justice: some conceptual building blocks for research and action, *Water International*, 39(2), 143–158.